

Nacionalista y demócrata no puede ser

Santos Juliá, El País, 26/01/1997

Tal vez fuera porque, cuando despertamos a la curiosidad razonadora, el relato de las glorias de nuestro pasado nacional giraba en torno a una guerra civil o quizá porque no nos afligía nada contemplar los muros derruidos de la patria mía; el caso es que para los nacidos en los años cuarenta y cincuenta el nacionalismo era el último de los recursos imaginables para ir en busca de una identidad colectiva. Como los jóvenes de principios de siglo, nuestra preocupación principal fue salir, traspasar fronteras, dejar España detrás, a la espalda. Lo hicimos de forma masiva, hasta el punto de que la nuestra, si se exceptúa la de 1914, obsesionada por el problema español, fue la primera generación universalista: queríamos ser en tal cosa como los franceses, en esto otro como los ingleses y hasta en aquello de más allá como los americanos.

No sabíamos entonces que, por crecer tan reacios al nacionalismo español, nos estábamos preparando, como sin quererlo, para incorporar por vez primera valores democráticos a nuestra cultura política. Cuando nos hallamos en el medio del camino de nuestras vidas -como se veía Ortega en 1913-, aquella educación universalista sirvió de fundamento para la construcción de una convivencia democrática nunca antes consolidada en España. Casi podríamos decir, reflexionando sobre nuestra propia experiencia, que sólo porque el nacionalismo de cartón piedra que trataron de inculcarnos se cuarteó al exponerse a los aires procedentes de Europa y Estados Unidos nos volvimos insensible pero definitivamente demócratas.

Pensamos, ingenuamente, que ése sería también el destino de todos los nacionalismos, no sólo del español: que, fueran cuales fuesen las glorias de sus respectivos relatos históricos o míticos, el aire de la democracia los impregnaría de valores universalistas que acabarían por atemperar su agresividad a veces mortífera, su rechazo del otro, su exaltación étnica, su repulsa del pensamiento crítico, su afanosa búsqueda de homogeneidad cultural. Nada de eso ha ocurrido: a medida que el nacionalismo español dejaba de ser el fundamento coactivo de nuestro sistema político, los nacionalismos vasco y catalán han

pugnado por construir con distintos grados de agresividad una identidad separada, marcar la frontera de un "ellos" y un "nosotros", contener, levantando, barreras, la inevitable pendiente hacia una sociedad multicultural y plurinacional.

Por eso, más que irritación, es una profunda decepción lo que produce tropezar con respuestas como las de Ardanza y Arzalluz a una carta, respetuosa hasta la deferencia, firmada por 22 "universitarios, escritores o profesionales estrechamente ligados a la vida del País Vasco". "Debiera haber ido a la papelera", ha dicho con su zafia hosquedad el presidente del PNV, que justifica tal destino con el argumento, sutil donde los haya, de que sus firmantes son, por este orden: pocos, se llaman intelectuales y defienden a "una persona que es del grupo de ellos, ¿no?", con los que, suprema razón, "se les ve el pelo a todos ellos".

¿Y qué se le ve al presidente del PNV cuando recurre a semejante lenguaje? La respuesta viene sola, pero no están los tiempos para bromas. No, no es el plumero lo que se le ve. Lo que Arzalluz revela con su gesto y sus palabras es que el nacionalismo se ha convertido, en este final del siglo XX, en una ideología que, al situar supuestos derechos colectivos sobre los derechos concretos de ciudadanos individuales, constituye el más grave peligro para la libertad, pues reduce los ámbitos de tolerancia, excluye a los otros que no pertenecen al grupo de los nuestros y les niega el derecho a ser ellos mismos. Con su lenguaje, tan reminiscente de la peor demagogia antiintelectual de todos los totalitarismos, incluido el franquista, Arzalluz demuestra que nacionalismo y democracia se encuentran, como sospechábamos, en relación inversa: mientras más haya de lo uno, menos habrá de la otra, y viceversa.

Tabúes fuera

Santos Juliá, El País, 02/03/1997

Como si quisiera cumplir sin dilación la consigna de "ya somos mayorcitos y podemos hablar de todo", lanzada hace unas semanas por Ardanza, el portavoz del PNV se ha dejado de medias palabras y ha ido por derecho al corazón del asunto: si ETA deja de matar ¿de qué demonios va a negociar? Nadie como Egibar podía resumir toda la sustancia del debate en un solo pensamiento.

En efecto, así es: si ETA deja de matar, nada hay que negociar, porque tendría abierto el mismo campo que las demás organizaciones políticas, y en igualdad de condiciones, para la propaganda de su programa y la movilización de sus partidarios. Si ETA dejara de matar -y de raptar, y de extorsionar- se convertiría en una organización legal, incorporada al sistema político y su fuerza dependería de lo único que cuenta en una democracia, del voto. Puesto que eso no es así, y como somos mayores, hay que negociar. Lo cual quiere decir que si la negociación es necesaria, lo es únicamente porque ETA mata. Hasta aquí todo está claro.

El problema surge cuando, después de tan lúcida observación, el PNV exige que los interlocutores sean ETA y el Estado aunque se guarda de decir sobre qué deben negociar. Dejemos de lado las condiciones de la negociación, la cuestión nada irrelevante de si se puede negociar con las pistolas no ya encima de la mesa sino apuntando a la cabeza de pacíficos ciudadanos; no hablemos del lugar que el PNV se reserva para sí, su ubicación en un espacio equidistante, que algunos percibimos puramente ilusorio, entre dos bandos. enfrentados; evitemos, en fin, la peliaguda cuestión de si es posible separar la finalidad de una causa de los medios empleados para su triunfo. Todo eso es sustantivo, desde luego, pero afrontarlo ahora podría desviar la mirada de lo principal.

Lo principal es que, si la lógica conserva algún sentido, el recuerdo de nuestra mayoría de edad unido a la exigencia de negociación con ETA implica la existencia de algo que no nos atrevemos a mentar y que es preciso sacar a la luz aunque sea por la fuerza de las armas. Y aquí es donde, tras las múltiples

declaraciones emitidas durante este sangriento mes, seguimos tan a oscuras como siempre. Cuando los dirigentes del nacionalismo vasco aseguran que ETA y Estado deben negociar desechando los miedos que paralizan a los menores de edad ¿a qué exactamente se refieren? Deben decirlo, porque de otra forma hurtan el debate sobre específicas propuestas políticas y los sustituyen por insultantes juicios de intención o lo desvían hacia polémicas ideológicas propias de profesores de filosofía de la historia.

Si no se entiende mal -pero esto es algo que deben aclarar ellos mismos- la relación establecida entre mayoría de edad política y negociación con ETA significa que el PNV cree llegado el momento de hablar de lo innombrable e incluir en el orden del día político las medidas necesarias para que los ciudadanos que viven en territorio vasco puedan ejercer el derecho a la soberanía y a la independencia. ¿Se trata efectivamente de eso? Parece que sí, pues, según dice el mismo Egibar, lo que nos "asusta" a los demás es que el PNV "pueda decir que ha llegado la hora de superar el examen de la democracia y de ver quién está dispuesto a respetar lo que la ciudadanía vasca pueda decidir."

Para hablar como mayores es imprescindible que todo el mundo, además del susto, abandone el ambiguo lenguaje de los "pueda decir" y comience a hablar el lenguaje del decir. La ciudadanía vasca supera el examen de la democracia cada vez que acude a las urnas. No puede tratarse, por tanto, de este derecho, sino de algún otro hasta ahora tabú. ¿Cuál es? ¿Convocar un referéndum que permita a la ciudadanía vasca ejercer un derecho negado por el Estado español? ¿Es eso? Pues tabúes fuera. Y para empezar, sería interesante saber para cuándo reclama el PNV ese referéndum, qué pasos ha previsto hasta su convocatoria y por qué razón tendría el Estado que negociar con ETA a este respecto.

El dilema del PNV

Santos Juliá, El País, 16/03/1997

En sus declaraciones al diario francés *Le Monde*, Xabier Arzalluz asegura que el tema clave de la autodeterminación del País Vasco constituye una "buena base para el arreglo del conflicto. Para todos nosotros, nacionalistas, el reconocimiento de este derecho es fundamental". Ejercer ese derecho, sigue diciendo, es otra cuestión porque antes sería preciso decidir quién debe votar y en qué marco geográfico tendría que realizarse la votación, cuestiones que no están por ahora en el orden del día. La cuestión, hoy, es que el Estado español reconozca el derecho de autodeterminación de Euskadi.

No siempre ha sido así. No lo fue en el PNV anterior a la guerra civil. Pero no lo fue tampoco, aunque muchos crean lo contrario, en el debate constitucional. El día 21 de julio de 1978, hablando en el Congreso de los Diputados, Arzalluz afirmó que al presentar la enmienda referente al pacto con la Corona, su Grupo no pretendía ningún "escapismo autodeterminatorio", y reconoció explícita y "plenamente la unidad del Estado". Arzalluz dejó "bien claro" que en el reconocimiento, solicitado por su Grupo, de los derechos históricos suprimidos por las leyes abolicionistas de los Fueros "no había ni intención autodeterminatoria, ni quitar el techo constitucional, ni salirnos de la Constitución". En todo caso, Arzalluz tranquilizó a sus oyentes diciendo que, fuera cual fuese el resultado final del debate, su Grupo acataría la Constitución, aunque se viera forzado a no aprobarla, y seguiría impasible por la senda democrática, sin tentación alguna hacia la violencia y hacia la coacción. En aquellos no tan lejanos días, el derecho fundamental reclamado por el PNV consistía en "hacer real una autonomía profunda".

El Grupo Nacionalista Vasco no consiguió que se aprobaran sus enmiendas y no votó la Constitución, pero a todo el mundo le quedó la convicción -porque así lo remachó expresamente Arzalluz- de que si la Constitución debía ser algún día reformada, el PNV lo propugnaría utilizando los cauces democráticos que la misma Constitución ofrecía. Autonomía profunda frente a autodeterminación, como objetivo de la acción política; vía democrático constitucional frente a la violencia y coacción, como estrategia para alcanzar aquella meta: eso era lo que se

desprendía de las palabras que el señor Arzalluz creía que "debían ser dichas" y que dijo "con toda el alma" en aquel debate.

¿Qué ha cambiado en estos veinte años para que el PNV haya girado tan decisivamente en su identificación del conflicto vasco y de las vías para su arreglo? No que el Estado no haya institucionalizado una "autonomía profunda" en Euskadi; tampoco que se haya cegado la vía democrática de reforma de la Constitución, nunca intentada. En realidad, lo único nuevo es que la violencia se ha consolidado como una estructura de la vida diaria del País Vasco y ha destrozado su comunidad político-moral. Hoy la sociedad vasca vive bajo un aparato coactivo de indefinida perduración que disputa al Estado, con relativo éxito y eficacia, el ejercicio de la violencia legítima.

Como respuesta a este hecho, el PNV cree que puede reconstruir la comunidad moral vasca -expresada en el sujeto colectivo "todos nosotros, nacionalistas"- elevando su reivindicación inmediata de la autonomía a la autodeterminación. Para jugar ese papel, se ha situado en un terreno alejado por igual de ETA y del Estado y al margen de la vía democrático-constitucional de reforma de la Constitución. De ahí los titubeos en su política policial; de ahí la pretensión de "tender puentes" organizando visitas que sitúan en pie de igualdad a sus interlocutores. Pero de ahí, sobre todo, que perciba hoy la salida del conflicto como negociación incondicional entre dos violencias enfrentadas, ETA y Estado. Con eso, el PNV olvida un punto crucial: que en cuanto gobierna parte del Estado, él es también Estado. Mientras más tiempo tarde en reconocerlo, más enquistado tendrá el conflicto que trata de resolver.

Leninistas de andar por casa

Santos Juliá, El País, 20/04/1997

¿Se puede no ser español y percibir del Estado español la más alta de las pensiones posibles? Sí, se puede, pero a condición de pertenecer a HB y haber disfrutado de la condición de diputado en las Cortes Generales. Los parlamentarios cuidaron bien su futuro y se asignaron una bonita pensión para el día de su jubilación forzosa. Los abogados de HB, también previsores, rellenaron todos los papeles para que su cliente no perdiera esos derechos. El resultado está a la vista: un veterano de la mesa de HB, que no reconoce al Estado español, pasará el resto de sus días percibiendo una pensión mucho más sustanciosa que si hubiera seguido su primera vocación y fuera hoy un banderillero retirado.

La suerte que ha convertido a este valiente luchador contra el Estado opresor español y la explotadora sociedad capitalista en un respetable jubilado es sólo un símbolo de la desnudez teórica y el fraude práctico que oculta la coalición a que pertenece. Políticos al fin, aunque de la clase de los radicales, los miembros de la dirección de HB no temen aceptar hoy exactamente lo contrario de lo que rechazaban ufanos ayer: que el Tribunal Supremo ni ningún otro tribunal español era quién para exigir nada de un ciudadano vasco, ni la explicación de sus razones y actividades políticas ni las fianzas para andar libremente por la calle. El Supremo no era quien para detenerles ni para dejarles en libertad.

Al responder con tal marcial arrogancia a un auto del Supremo citándoles a declarar, los miembros de la mesa de HB daban por descontada la reacción del resto de los partidos nacionalistas. En efecto, el mismo día del auto el portavoz del PNV tildó de "despropósito" la llamada del Supremo y le atribuyó ocultas intenciones relacionadas con la misteriosa coyuntura. El venerable Tribunal buscaba únicamente el "aplauzo fácil pero terminaría organizando un circo, dijo en seguida el portavoz de EA. Claro que estos festivos vaticinios se quedaron cortos ante el anunciado por un nuevo profeta de desastres: el Tribunal Supremo, según la preclara mente del líder de IU en Euskadi se había convertido en una fábrica de mártires y se disponía a enviar, a costes pagados, una remesa de 25 a los altares de HB.

Las bravatas de HB y las catástrofes anunciadas por PNV, EA e IU se han venido abajo por la módica cantidad de 500.000 pesetas por mártir, sagazmente dispuesta por un juez del Supremo. Cuando apenas habían transcurrido dos meses de prisión, los miembros de la mesa nacional de HB han decidido que ya estaba bien de bromas y se vuelven a casa. ¿Qué ha pasado? Argumentarán, desde luego, que el Estado español ha claudicado una vez más y ha puesto tan módico precio a la libertad que era imposible no comprarla. Pero la verdad del caso es que HB iba a enseñar los dientes al Estado con la llamada a una huelga general y al final la feroz dentellada quedó en leve mordisco. El juicio a que el pueblo vasco sometería al Estado español por la detención de estos mártires de la libertad acabó en agua de borrajas.

Todo lo cual entraña una irónica lección: que la democracia es fuerte sólo cuando confía en sus procedimientos. Los magistrados del Supremo, unos señores políticamente tan torpes que llamaron a destiempo a toda la dirección de la temible coalición abertzale y la citaron de manera que parecía a propósito para alimentar una agitación permanente, han prestado un singular servicio político con la sola decisión de hacer cumplir la ley: han dejado desnuda y a la intemperie toda la retórica belicista de estos aguerridos leninistas. Si ese hubiera sido el caso de los partidos políticos de Euskadi, hace ya tiempo que se habría revelado lo hoy evidente: que leninistas a tan bajo precio no son más que revolucionarios de salón; que cuando sale tan barato liderar un movimiento de liberación, es que no hay ninguna liberación que liberar. Pensionistas y en casa, ese es su mejor destino.

¿Fin del apaciguamiento?

Santos Juliá, El País, 20/07/1997

Tantas veces se ha comparado al conglomerado ETA-HB con el partido nazi que tal vez no resulte impropio -a pesar de las obvias diferencias de tiempo y situación- recordar el desastroso resultado de la política de apaciguamiento seguida por Gran Bretaña frente a la amenaza del nazismo alemán. Pues si algo de la estrategia nazi perdura en la práctica política de ETA-HB, mucho de la estrategia británica recuerda la seguida o propuesta por amplios sectores del nacionalismo vasco y no pocos políticos y publicistas españoles.

El punto de partida de los políticos británicos fue una benévola comprensión, hacia las primeras reclamaciones alemanas, lo que les llevó a compartir cierto prejuicio de legitimidad respecto a la causa última defendida por los nazis. Nada afectaba a esa comprensión que los medios utilizados para fortalecer a Alemania aplastaran los derechos de los vecinos y de las minorías. El partido nazi estaba ahí y cualquier consideración que se interfiriera en el tratamiento del nazismo como un hecho político era cosa de moralistas o ignorantes.

Ese doble supuesto -legitimidad teórica de la causa final, indiferencia práctica ante los medios- se reforzaba por la convicción de que los Estados, por actuar con criterios de racionalidad, podían alcanzar acuerdos que obligaran por igual a todas las partes. Los británicos, acostumbrados a una diplomacia de búsqueda de equilibrios, creían que sobre cualquier asunto cabía la negociación y que, una vez alcanzado un razonable nivel de concesiones, los alemanes quedarían satisfechos. Así entraron en la espiral que llevaría hasta Munich en la seguridad de que la paz estaba por fin consolidada aunque fuera sobre las espaldas de checos y eslovacos.

A esta política de cesión se añadía por parte británica un cálculo de interés: mientras Alemania mantuviera relaciones, si no de colaboración, al menos de no agresión con Gran Bretaña, la URSS viviría bajo una amenaza que serviría al Reino Unido para reforzar su papel de árbitro de la política europea. Semejante razonamiento estratégico se repitió con Italia, a la que se quiso atraer a la órbita británica para aislar al monstruo alemán crecido

mientras tanto en el centro de Europa. Naturalmente, era tarde: la URSS, amenazada, pactó con Alemania, mientras Mussolini, lanzado a la aventura mediterránea, se echaba en manos de Hitler. El resultado de la política de *appeasement* no fue la paz sino, la guerra.

Algo hay en esta política entre Estados que puede valer para las relaciones entre partidos dentro de un mismo Estado. La presunción de legitimidad de la causa última de un partido, con olvido de los medios utilizados para imponerla, conduce en las democracias a una situación de debilidad que arrastra una quiebra de confianza en las instituciones. La ilusión de que todos actúan según criterios de idéntica racionalidad y los cálculos de interés para obtener ventajas inmediatas acaban rompiendo el frente de los demócratas ante el regocijo de los totalitarios. Así, los ciudadanos se sienten, de un lado, desprotegidos por sus instituciones; del otro, desorientados ante la debilidad y enfrentamiento de los demócratas.

Lo que nos ha pasado estos días es que los ciudadanos vascos han pulverizado en la calle ese dogal de la impotencia ante el terror que los partidos democráticos no han sabido romper en 20 años. Cuando desde Ermua nos llega la consigna "*!Herri Batasuna lo tiene que pagar!*", lo que se nos dice es que la paz nunca se puede alcanzar a costa de la impunidad del agresor. El reto hoy consiste en traducir ese grito de la calle en lenguaje de la política. Los primeros pasos son alentadores, pero si volviera a escucharse que ETA está ahí, que no se puede aislar socialmente a los agresores, que es preciso buscar una salida política, no estará de más recordar que la paz, cuando se trataba con nazis, sólo pudo conquistarse en las antípodas del apaciguamiento.

Todo Setián

Santos Juliá, El País, 09/11/1997

Que un obispo busque la oportunidad de expresarse en una larga entrevista y que ni por asomo aparezcan en sus declaraciones palabras como Dios o Cristo, ni cualquier otra del vasto léxico religioso, es un claro síntoma de que el mensaje transmitido a los lectores poco tiene que ver con la religión. Pero si alguien cree que el obispo, por no hablar de religión, habla sólo de política sacaría una conclusión apresurada. No es de política de lo que habla, si por tal se entienden las acciones que los partidos o gobiernos deben tomar ante una determinada cuestión. Ni de creyente, ni de político, el lenguaje de este obispo es el lenguaje de un clérigo.

El clérigo se sitúa ante la sociedad, en la que sólo ve a un pueblo, reclamando para sí una función específica que consiste en "dar orientaciones, ayudar a la gente a enfrentarse" con los problemas. Como el intelectual, el clérigo se cree investido de autoridad para orientar al pueblo a buscar soluciones a problemas que por sí mismo es incapaz de percibir, ocultos como están tras las engañosas apariencias de lo visible. Pero, a diferencia del intelectual, que compite individualmente en el mercado de las ideas, el clérigo forma parte de una iglesia que reivindica la misión de velar por la unidad del pueblo y proponer vías para el restablecimiento de la paz en tiempos de guerra. Este clérigo habla, pues, como eclesiástico, como jerarca de una institución que se cree depositaria de la misión de devolver a su pueblo la paz perdida.

Para emprender los caminos de paz, el terrorismo -tratado como un "fenómeno" o manifestación de un problema más hondo- no puede abordarse en sí mismo, sino en el proceso de reconstrucción de "un pueblo que sea capaz de conservar su identidad". Lo que propone entonces el clérigo, el punto en que aparece todo Setián, consiste en relativizar "lo que se entienda que deba ser la manera de organizar el futuro de la convivencia de los pueblos en relación con el Estado español, que es algo que ha de someterse a estudio". La Constitución no ha resuelto el problema: hay que seguir estudiando. Pero someter a estudio no es someter a voto. La única ocasión en que Setián se refiere a

votos es cuando recuerda que no son necesarios para "dar orientaciones". Las orientaciones se derivan del estudio que permita dar con la fórmula para acabar con "el problema que estamos viviendo y que se manifiesta en actuaciones de terrorismo y demás".

Es intrigante este "demás" y sólo a continuación de la entrevista nos sitúa en la pista de lo que quiere decir. Por "demás" debe entenderse la creciente respuesta al terrorismo con iniciativas como el aislamiento social a "los que son de HB". Tras los últimos asesinatos, la gente perdió el miedo y se dispuso a responder al terrorismo con actitudes que en la opinión clerical significan "declarar la guerra social en el País Vasco". La guerra no la declara el terrorista; el terrorista se limita a manifestar un problema. La guerra la declaran los que pretenden aislar a quienes sostienen a los terroristas. Y esto no puede quererlo un hombre de Iglesia. "Yo no la quiero", dice el clérigo. No quiere la guerra social, no quiere el aislamiento social de HB.

Como esta movilización contra el terrorismo sitúa al pueblo vasco al borde de una guerra social que redundaría en descalabro del nacionalismo habrá que contenerla y encauzarla hacia vías de pacificación: ahí radica la razón de la salida a la palestra de Setién para alentar una conversación con ETA sin necesidad de establecer previamente una paz de Dios como exigía el clero en las guerras feudales. La actitud legalista adoptada por la defensa de HB, la invocación a la Disposición Adicional de la Constitución por Elkarri, las conversaciones entre el PNV y EA, la convocatoria de ELA, el estudio y la conversación que propone Setién, ¿no será todo esto una sutil respuesta a un espíritu de Ermua que amenazaba con llevarse por delante cualquier ideal nacionalista?